

En defensa de una educación pública de calidad

En este momento la desigualdad educativa sigue siendo el principal problema a resolver, reflejo de la desigualdad social profundizada por las dictaduras militares y la dictadura económica neoliberal. Hoy tenemos educación pública de mala calidad para las clases empobrecidas, educación privada subsidiada para las clases medias y educación privada para ricos (incluso financiada por los Estados). Aun en los países en los que se están haciendo esfuerzos para transformar esa realidad, esta lacerante desigualdad sigue vigente.

Las reformas han deteriorado la profesión docente, generando salarios de hambre en los años ochenta y recuperaciones totalmente insuficientes de los mismos en los años noventa y hasta la fecha, de modo que la profesión se ha vuelto un quehacer no atractivo para las nuevas generaciones y en una opción de tercer nivel en sus decisiones de estudios superiores. La formación inicial y en servicio no forma parte de la mayoría de políticas de Estado, y más aún ha sido privatizada y puesta en manos de entidades particulares que no observan un compromiso con el desarrollo nacional ni a corto ni a largo plazo. Junto con esto, hoy surgen cientos de supuestas universidades e institutos de educación superior dedicados a producir docentes, sin que el Estado tenga

El sector docente de América Latina enfrenta hoy un proceso de evaluación punitiva guiada bajo criterios del Banco Mundial, promovido por algunos gobiernos que insisten en adjudicar los problemas de la calidad de la educación a las docentes y los docentes, especulando erróneamente que esta evaluación descontextualizada, podrá mejorar el rendimiento académico.

En los países de América Latina donde hay gobiernos de signo neoliberal, los sistemas educativos continúan siendo deteriorados, con el concurso de las Instituciones Financieras Internacionales, entre ellos el Banco Mundial. Dichos sectores han culpabilizado tanto el sentido de lo público, como a educadoras y educadores del estado de deterioro de la educación pública. Todo esto ha conformado un discurso y prácticas deliberadas para desprestigiar el sistema de educación pública en la sociedad e instalar el comercio de la educación, excluyendo y limitando las capacidades del Estado para garantizar la calidad y sostenimiento de la educación en los países y convertir la educación como otra actividad económica a ser desarrollada por la empresa privada nacional y transnacional. Esto no ha sucedido de manera fortuita sino que constituye parte de las tácticas de sectores empresariales altamente beneficiados con las políticas neoliberales.

Mientras tanto, algunos gobiernos en asocio con empresas privadas nacionales y transnacionales aumentan la presión en las negociaciones sobre servicios en el marco del Acuerdo General de Comercios de Servicios (AGCS o GATS en inglés), buscando acentuar la tendencia a la comercialización de la educación en todos sus niveles. En América Latina se verifican casos de iniciativas impulsadas por gobiernos, tendientes a promover la movilidad de estudiantes y profesores, el reconocimiento de títulos y la acreditación conjunta de carreras en el marco de acuerdos regionales o bilaterales en un contexto de mucha desigualdad en cuanto a oportunidades educativas y laborales. Ello propicia así el desarrollo de mecanismos que, de no mediar una decidida intervención de los Estados tal que garantice y preserve el carácter público de la educación, como derecho social fundamental para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, afectan de manera enfática al sector de la educación superior al profundizar el proceso de transnacionalización mercantil y ahora facilitado por el empleo de las nuevas tecnologías que permiten la comercialización de la educación en su modalidad virtual.

De igual manera, América Latina continúa enfrentando graves violaciones a los derechos humanos y sindicales y a la negociación colectiva. En este sentido, continúa siendo grave la situación que por décadas ha enfrentado el magisterio colombiano, y en pleno 2011 el magisterio hondureño enfrenta la misma situación por su compromiso de resistir el Golpe de Estado. Así mismo, en algunos de los países de América Latina hay

una clara tendencia regresiva de la legislación laboral que deteriora las condiciones de trabajo y lesiona derechos ya conquistados por el sector docente.

La Internacional de la Educación para América Latina ha reafirmado la educación como un derecho humano y un derecho social fundamental que no puede ser transformada en una mercancía.

Continúa combatiendo abiertamente las políticas de deterioro de la educación pública, su privatización y a sus gestores nacionales e internacionales. En tal sentido, se continuará desarrollando acciones contra la comercialización de la educación y por la no inclusión de la educación como un servicio en el marco del Acuerdo General de Comercio y Servicios.

A la vez, promueve en conjunto con otros sectores de la sociedad, debates nacionales que sean la base para la formulación de propuestas educativas alternativas, que busquen aumentar el nivel de los derechos